

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto

Exp. 05001-31-05-016-2019-00183-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por ELENA PATRICIA MARÍN QUEJADA, frente al auto que negó el decreto de una prueba, dentro del proceso ordinario laboral que adelanta en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN y la FUNDACIÓN LUIS FERNANDO VIVE.

ANTECEDENTES:

La demandante puso en marcha este proceso, con el fin de obtener la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo ejecutado con la fundación demandada entre el 15 de enero y el 02 de septiembre de 2018, para en consecuencia, lograr el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa, además de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social, la sanción moratoria, la indexación y las costas del proceso.

Dentro del escrito de demanda y a fin de dar convicción sobre los hechos relatados y lograr la prosperidad de lo pedido, la parte demandante pidió como prueba la recepción de los testimonios de Ana Yancy Quejada

Romaña, Natalia Andrea Miranda Miranda, Liliana María Betancur Bedoya y Gladis Elena Gómez Jiménez.

En audiencia que se celebró el 09 de noviembre de 2023 el Juzgado de Conocimiento que lo es el Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, decidió negar tal medio probatorio, aduciendo que no se aprecia el cumplimiento de las prerrogativas del artículo 212 del CGP, ni se determinaron los hechos que pretenden ser demostrados, agregando no considerarlo necesario en tanto de ellos a su juicio no es posible probar hechos indefinidos o negaciones como lo es el pago de las prestaciones sociales que por demás se presumen por inasistencia de la parte.

La activa se apartó de esa decisión con interposición del recurso de apelación, insistiendo en el decreto de la prueba toda vez que además de estar debidamente individualizada, se indicó al inicio de la diligencia el objeto de cada declaración según los hechos de la demanda, no encontrando mérito para que sea negada, señalando que, de ser así, se estaría cercenando el derecho de defensa y debido proceso.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto recurrido se encuentra regulado en el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS. Luego, y a partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si debe revocarse la determinación del *a quo* de no decretar la prueba testimonial pedida por la parte promotora del juicio.

Pues bien, el artículo 168 del CGP aplicable por remisión analógica permitida por el 145 del CPTSS, prescribe que el juez rechazará, mediante

providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles lo que en igual sentido prescribe el artículo 53 del CPT y de la SS.

En ese contexto, se tiene que la finalidad o propósito de cualquier régimen probatorio no es otro que el de infundir certeza al juez sobre unos hechos determinados. Para alcanzar este objetivo, las leyes procesales ponen al alcance de las partes distintos medios probatorios: la declaración de parte, el juramento, el testimonio, los documentos, etc. La utilización de unos u otros depende, en su mayoría, no de la voluntad o el querer de los sujetos intervinientes, sino de lo que se pretenda probar. Es por ello que, si se trata de acreditar unas condiciones en el marco de un contrato de trabajo, la prueba documental o testimonial serán de gran valor; así como lo es la prueba pericial ante el requerimiento de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.

Con fundamento en lo que se anota, es claro que lo que se debate en un proceso es siempre el punto de referencia para saber si una prueba es conducente y pertinente para acreditar un hecho determinado (art. 168 del CGP). Poca importancia debe dársele a las exigencias puntuales que frente a un medio de prueba determinado imponga o sugiera la ley, ya que no debe olvidarse que la razón de ser de la administración de justicia, no es otra que la de proteger los derechos reconocidos por la ley sustancial (arts. 228 de la C. N. y 11 del CGP).

En ese orden, de conformidad con lo que se plantea en la demanda, donde no solo se endilga la ausencia de pago de unas prestaciones sino que se pregona la existencia de un vínculo y se busca la indemnización por un despido sin justa causa, ante el evento adicional de no existir pronunciamiento de quien se aduce fungió como parte empleadora, estima la Sala que la prueba pedida por la parte convocante y negada por el fallador de primer grado, no solo cumplen con el fin que persiguen, que no es otro, se repite, que el de acreditar o no la existencia de una relación

laboral y un despido injusto, sino los establecidos por la ley para la prueba testimonial.

En tratándose de esta modalidad probatoria, lo ideal es el máximo detalle con el fin de que bajo ninguna circunstancia pueda llegar a pensarse en una violación al derecho de defensa o al debido proceso como es desde ya atribuido por la parte apelante, pero lo que no puede ni debe hacerse es trasladar ciegamente las exigencias de un código a otro. En el presente caso la prueba testimonial solicitada por Elena Patricia Marín Quejada fue negada porque se estimó que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 212 del CGP, lo que no es cierto, pues lo que se observa es que se señaló el domicilio y residencia de los llamados a declarar, y aunque en el escrito inicial no se detalló los hechos concretos objeto de la prueba, ello es viable desprenderlo de la lectura de los fundamentos fácticos y las pretensiones planteadas. Además, en materia procesal laboral y de la seguridad social, lo ha dicho y reiterado la doctrina y la jurisprudencia, atendiendo la literalidad de las disposiciones correspondientes, que en materia de pruebas, el artículo 25 del código de la materia, en su numeral 9 (art. 12 de la Ley 712 de 2001), solo exige *“La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba”*, lo que de frente a los derechos que están en juego, no puede interpretarse con los criterios establecidos en el Código General de Proceso.

Es desde las consideraciones previas que la decisión adoptada no se acompasa con los objetivos propios de la legislación que nos rige, y siendo ello así, se revocará la decisión, y en su lugar se ordenará su decreto y práctica.


Sin costas en la instancia.

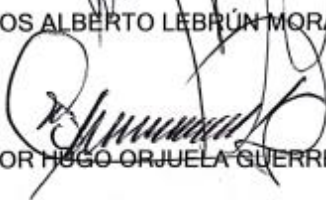
DECISIÓN:


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto objeto de apelación, de fecha y

procedencia conocidas y, en su lugar, ordena el decreto y práctica de la prueba testimonial solicitada por la parte demandante. Sin costas.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 1 fijados el 11 de enero de 2024
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.